

**Edición del Modelo de las Naciones Unidas del Colegio Alemán Alexander von
Humboldt:
HUMBOLDTMUN 2026
Manual del Delegado
ACNUR**



Carta de bienvenida:

Queridos delegados,

Nos complace darles la bienvenida al comité de ACNUR en este Humboldt-MUN 2026. Nos llena de entusiasmo contar con su presencia y su compromiso con la seguridad y los derechos de las mujeres, pilares para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

En este comité tendrán la oportunidad de representar países y puntos de vista, hacer aliados y llegar a soluciones a través del diálogo. Esta es una guía de suma importancia para su desempeño en el modelo, incluye información acerca de los tópicos que se debatirán y que les ayudará a redactar su hoja de posición. Además, incluimos preguntas clave que esperamos les sirvan para realizar su investigación y destacar al momento de debatir.

Si tienen alguna duda por favor no duden en escribirle a cualquier miembro de la mesa directiva. Les deseamos el mayor de los éxitos y esperamos que este modelo sea una experiencia enriquecedora para cada uno de ustedes.

Atentamente,

Daniela Bonequi
Presidenta

Lea Rodríguez
Moderadora

Ricardo Degollado
Oficial de conferencias

2124833@ca.edu.mx

2124672@ca.edu.mx

2134999@ca.edu.mx

Información del comité:

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es el organismo de la ONU encargado de proteger y asistir a las personas refugiadas, desplazadas forzosas y apátridas. Fue creado en 1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo inicial de atender a las personas desplazadas tras la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, su mandato se ha ampliado y hoy en día tiene un carácter permanente debido a la persistencia de conflictos, persecuciones y crisis humanitarias a nivel mundial.

La labor principal de ACNUR consiste en salvaguardar los derechos humanos de las personas forzadas a huir, garantizando su acceso al asilo, la protección internacional y condiciones de vida dignas. Asimismo, proporciona asistencia humanitaria de emergencia, como alojamiento, alimentos, agua potable, atención médica y educación, especialmente en contextos de crisis. El organismo también trabaja en la búsqueda de soluciones duraderas para los refugiados, promoviendo el retorno voluntario y seguro a sus países de origen, la integración local en los países de acogida o el reasentamiento en terceros países cuando sea necesario.

Además, ACNUR desempeña un papel clave en la prevención y reducción de la apatridia, colaborando con los Estados para fortalecer marcos legales que permitan a las personas acceder a una nacionalidad. De igual manera, coordina esfuerzos con gobiernos, organizaciones internacionales, la sociedad civil y otras agencias de la ONU para implementar el Pacto Mundial sobre los Refugiados y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, promoviendo la solidaridad internacional y la responsabilidad compartida frente a las crisis de desplazamiento forzado.

Lista de Miembros:

- República Federal de Alemania
- Reino de Arabia Saudita
- República Federativa de Brasil
- Canadá
- República Popular China
- República Árabe de Egipto
- Reino de España
- Estados Unidos de América
- República Francesa
- República Islámica de Irán
- República de Irak
- Estado de Israel
- Japón
- Reino Hachemita de Jordania
- República de Kenia
- República Libanesa
- Estados Unidos Mexicanos
- República de Mozambique
- Estado de Palestina
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
- República del Sudán
- República Árabe Siria

Tópico A: Seguridad en campamentos de refugiados en Palestina:
Medidas para enfrentar la militarización y ataques.

En 1948, Gaza se convirtió en un territorio que albergó a una gran cantidad de refugiados palestinos como consecuencia de la proclamación del Estado de Israel, concebido como un Estado judío seguro. A raíz de este acontecimiento, aproximadamente 750.000 palestinos se vieron afectados por el desplazamiento forzado, viéndose obligados a buscar refugio en países vecinos como Jordania, Líbano, Siria y Egipto. Este suceso es conocido por el pueblo palestino como la Nakba, que en árabe significa “catástrofe”.

Una parte significativa de la población desplazada buscó refugio en la Franja de Gaza y en Cisjordania, lo que dio lugar a la creación de 27 campamentos de refugiados distribuidos en ambos territorios. Como consecuencia, estos campamentos se vieron sobrepoblaron rápidamente, generando condiciones de pobreza extrema para los habitantes de estos campos. Antes de la creación del Estado israelí, Gaza contaba con una población aproximada de 80.000 habitantes, tras la Nakba, la Franja albergó a cerca de 200.000 refugiados, lo que provocó que alrededor del 80 % de sus habitantes fueran refugiados palestinos.

Desde 1967, el Estado de Israel ha mantenido un control casi total sobre la Franja de Gaza, basado en la ocupación territorial y el establecimiento de asentamientos urbanos. Esta situación se agravó tras la Guerra de los Seis Días, lo que derivó en un aumento de la tensión y el descontento entre la población palestina. Como resultado, entre 1987 y 1993, y posteriormente en el año 2000, tuvieron lugar la Primera y la Segunda Intifada, levantamientos por parte del pueblo palestino en contra de la ocupación israelí.

En 2005, Israel retiró sus asentamientos en la Franja de Gaza, sin embargo,

continuó resultando con un control casi absoluto sobre el territorio, esta situación sigue teniendo repercusiones en la actualidad. Este control ha derivado en severas restricciones a la movilidad de personas y bienes, así como en limitaciones significativas al acceso de ayuda humanitaria. Tras la victoria electoral de Hamás en Palestina en 2006, Israel y Egipto impusieron un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo sobre Gaza como respuesta a dicha elección.

Este bloqueo ha tenido un impacto directo y grave en la vida de miles de refugiados palestinos que residen en la Franja de Gaza, la cual ha sido nombrada por diversas organizaciones de derechos humanos como “la prisión al aire libre más grande del mundo”. A su vez, el director general de Human Rights Watch para Israel y Palestina, Omar Shakir, afirmó que “Israel, con la ayuda de Egipto, ha convertido a Gaza en una prisión al aire libre”. Este término no sólo responde a las restricciones de movilidad, sino también a la presencia de muros, torres de vigilancia y controles militares que rodean el territorio.

El endurecimiento de tal bloqueo en 2007 agravó aún más estas condiciones, mediante diversas estrategias dificultaron la entrada y salida de personas, bienes y ayuda humanitaria. Dentro de este contexto, se han reportado múltiples violaciones a los derechos humanos. Organizaciones no gubernamentales (ONGs) como Amnistía Internacional han documentado un incremento en el número de fallecimientos causados por disparos de fuerzas israelíes contra civiles palestinos en zonas cercanas a los límites establecidos por Israel.

Asimismo, se han visto afectadas fuentes vitales para la supervivencia de la población, como la reducción del área permitida para la pesca, la fumigación de cultivos con pesticidas y el bombardeo de la única central eléctrica de Gaza. Las restricciones al movimiento a través de los seis principales cruces (Beit Hanoun (Erez), Karni, Nahal Oz, Kerem Shalom, Sufa y el paso de Rafah) han limitado gravemente el acceso a servicios médicos, el traslado de pacientes y la llegada

de personal de ayuda humanitaria. Estas condiciones han sido calificadas por diversos organismos internacionales como contrarias al derecho internacional humanitario.

Problemática actual

Desde hace más de dos años, la población palestina se ha visto afectada de manera grave por una intensificación del conflicto armado, lo que ha generado una crisis humanitaria sin antecedentes desde 1948. La Franja de Gaza es el resultado de décadas de desplazamiento forzado, persecución y falta de protección efectiva para la población civil. En el contexto de las hostilidades recientes, los campamentos de refugiados han sido especialmente vulnerables a la militarización y a los ataques, lo que ha puesto en riesgo constante la vida de civiles inocentes.

Las acciones militares han sido justificadas por las partes involucradas bajo argumentos de seguridad y autodefensa, tras los acontecimientos del 7 de octubre de 2023. No obstante, la ONU ha señalado que ambos lados han ocasionado violaciones al derecho internacional humanitario, afectando de manera desigual a la población civil. Como consecuencia, miles de personas se encuentran viviendo en condiciones extremadamente precarias, aisladas y con acceso limitado a servicios básicos.

A pesar de los anuncios de un alto al fuego, la población palestina continúa enfrentando graves faltas de atención de ayuda humanitaria. La inseguridad alimentaria sigue siendo una de las principales causas de mortalidad infantil, junto con la exposición al frío debido a la falta de refugios adecuados. El sistema de salud se encuentra colapsado, con un número reducido de instalaciones médicas operativas y una grave escasez de suministros. La insalubridad del agua se ha intensificado debido al mal funcionamiento de las

plantas de tratamiento, lo que representa un riesgo significativo para la salud pública.

Tras el levantamiento parcial de barreras en el borde de Gaza, aproximadamente 40.000 personas fueron desplazadas de sus campamentos, creando así uno de los mayores episodios de desplazamiento forzado desde 1967. Alrededor de 32.400 personas se han visto afectadas por daños en sus viviendas, sin contar con recursos económicos suficientes para acceder a un alojamiento alternativo, lo que ha provocado desplazamientos recurrentes.

En Cisjordania, hay casos de restricciones similares que dificultan el acceso a ayuda humanitaria. Servicios esenciales como la educación, la atención médica y la vivienda digna, se han visto comprometidos debido a los daños en la infraestructura, la falta de personal capacitado y la escasez de medicamentos. A esto se suma un incremento de la tasa de desempleo, que ha alcanzado niveles preocupantes del 28,6 %.

Organismos de las Naciones Unidas, como la UNRWA (Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente), han implementado planes de asistencia humanitaria destinados a apaciguar los efectos del conflicto y la inseguridad en los campamentos de refugiados. Estos planes buscan garantizar la continuidad de los servicios incluso en contextos de alto riesgo, evitando retrasos derivados de las restricciones de movilidad.

No obstante, recientemente Israel ha prohibido a 37 organizaciones brindar ayuda humanitaria en Gaza, lo que ha agravado aún más la situación, especialmente frente a inundaciones y tormentas invernales. Además, el gobierno israelí aprobó una ley para cortar el suministro de agua y electricidad a las oficinas de la UNRWA en Jerusalén. El martes 13 de enero de 2026, comenzaron a emitirse avisos oficiales dirigidos a estas instalaciones, con el

objetivo de cesar sus operaciones.

Esta medida, cuya implementación está prevista para quince días después de su anuncio, afectará a diez edificios de la UNRWA, incluyendo escuelas, clínicas, centros de capacitación y oficinas administrativas. Las consecuencias que se esperan impactan directamente en los sectores de educación, salud y asistencia humanitaria para los refugiados palestinos. Diversas organizaciones internacionales han señalado que esta ley va en contra de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y resoluciones de la Asamblea General, en particular la Resolución 302, que establece el mandato de la UNRWA para garantizar servicios básicos a los refugiados palestinos.

- **Preguntas guía:**

- ¿Por qué los campamentos de refugiados palestinos son especialmente vulnerables a ataques militares?
- ¿Cómo influye la sobrepoblación en la seguridad de los campamentos de Gaza y Cisjordania?
- ¿De qué manera la militarización afecta a la población civil que vive en los campamentos?
- ¿Qué obligaciones impone el derecho internacional humanitario para proteger a los refugiados?
- ¿Cómo impacta el bloqueo de Gaza en la seguridad y supervivencia diaria de los refugiados?
- ¿Qué riesgos específicos enfrentan niños y mujeres en contextos de conflicto armado?
- ¿Cómo afectan los ataques a la infraestructura básica (agua, salud, electricidad) a la seguridad humana?
- ¿Qué papel cumple la UNRWA en la protección y asistencia dentro de los campamentos?
- ¿Cómo limitan las restricciones a la ayuda humanitaria la protección de

civiles?

- ¿Qué medidas podrían reducir la militarización y mejorar la seguridad de los campamentos?

Referencias:

Hajjaj, T. S., & Hajjaj, T. S. (2026, 1 enero). *Amid disastrous flooding of displacement camps in Gaza, Israel bans humanitarian organizations providing.* Mondoweiss.

<https://mondoweiss.net/2026/01/amid-disastrous-flooding-of-displacement-camps-in-gaza-israel-bans-humanitarian-organizations-providing-relief/>

Israel to implement law cutting off electricity and water to UNRWA buildings in Jerusalem. (s. f.). WAFA Agency.

<https://english.wafa.ps/Pages/Details/166099>

M.I. (2025, 29 diciembre). *UNRWA Occupied Palestinian Territory Flash Appeal 2026 - Question of Palestine.* Question Of Palestine.

<https://www.un.org/unispal/document/unrwa-opt-flash-appeal-2026-29dec25/>

Rifi, I. (2025, 7 octubre). Gaza fue el mayor campo de refugiados del mundo mucho antes del 7 de octubre de 2023. *TRT Español.*

<https://www.trtespanol.com/article/2c77477177c7>

Tópico B: Crisis de refugiados en Sudán y el colapso humanitario

La crisis de refugiados en Sudán es el resultado de un proceso largo y complejo de inestabilidad política, militarización del Estado y violencia estructural que ha

marcado al país durante décadas. Aunque el conflicto armado que estalló en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) suele presentarse como el origen inmediato de la crisis actual, la realidad es que esta violencia representa la culminación de problemas históricos profundamente arraigados. El impacto humano de este conflicto ha sido devastador, provocando el desplazamiento forzado de millones de personas y el colapso casi total de las condiciones necesarias para una vida digna.

Desde su independencia en 1956, Sudán ha enfrentado una sucesión constante de gobiernos autoritarios, golpes de Estado y conflictos internos. El poder político y económico se concentró históricamente en manos de élites militares, mientras que amplias regiones del país, como Darfur, Kordofán y el Nilo Azul, fueron sistemáticamente marginadas. Esta exclusión prolongada alimentó tensiones sociales, étnicas y económicas que derivaron en múltiples conflictos armados y crisis humanitarias, incluso mucho antes de la guerra actual. Para millones de sudaneses, el desplazamiento no es una experiencia nueva, sino una condición repetida a lo largo de generaciones.

Uno de los antecedentes más relevantes del conflicto actual es la guerra en Darfur, iniciada a principios de los años 2000. Durante este periodo, el entonces gobierno de Omar al-Bashir recurrió a milicias armadas para reprimir a comunidades consideradas opositoras, lo que derivó en asesinatos masivos, violencia sexual sistemática y el desplazamiento de millones de personas. Estas milicias, conocidas como Janjaweed, evolucionaron con el tiempo hasta convertirse en las Fuerzas de Apoyo Rápido, hoy uno de los actores centrales del conflicto. La impunidad con la que actuaron estos grupos sentó las bases de una cultura de violencia que continúa afectando a la población civil.

El régimen de Omar al-Bashir, que se mantuvo en el poder por más de treinta años, se caracterizó por la represión política, la corrupción y el uso del aparato

militar como principal herramienta de control. En 2019, tras protestas masivas impulsadas por el deterioro económico y el hartazgo social, al-Bashir fue derrocado. Este momento fue recibido con esperanza tanto dentro como fuera del país, ya que se vislumbraba una posible transición hacia un gobierno civil. Sin embargo, este proceso fue frágil desde el inicio, debido a la fuerte presencia e influencia de las fuerzas armadas en la estructura del poder.

Tras la caída del régimen, se estableció un gobierno de transición compartido entre líderes civiles y militares. No obstante, esta convivencia estuvo marcada por tensiones constantes, particularmente entre el ejército regular (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Ambos actores buscaban consolidar su poder político, militar y económico, lo que derivó en una competencia directa por el control del Estado. Las diferencias sobre la integración de las RSF al ejército nacional y el calendario para la entrega del poder a un gobierno civil intensificaron estas tensiones, hasta que finalmente estallaron en un enfrentamiento armado abierto en abril de 2023.

El inicio del conflicto transformó rápidamente ciudades como Jartum en escenarios de guerra. Combates en zonas densamente pobladas, bombardeos indiscriminados y enfrentamientos prolongados atraparon a la población civil en medio de la violencia. A diferencia de conflictos previos, esta guerra se desarrolló en centros urbanos, afectando directamente a millones de personas que no tuvieron oportunidad de huir de manera segura. En cuestión de semanas, familias enteras se vieron obligadas a abandonar sus hogares, muchas veces sin alimentos, documentos o recursos básicos.

Como consecuencia directa de esta violencia, Sudán enfrenta hoy una de las mayores crisis de desplazamiento forzado del mundo. Millones de personas se encuentran desplazadas internamente, viviendo en asentamientos improvisados, escuelas abandonadas o edificios en ruinas. Las condiciones de vida en estos

lugares son extremadamente precarias: escasez de agua potable, falta de saneamiento básico, ausencia de atención médica y una inseguridad constante. La destrucción de hospitales y centros de salud ha dejado a gran parte de la población sin acceso a servicios médicos esenciales, aumentando la mortalidad por enfermedades prevenibles.

La inseguridad alimentaria se ha convertido en uno de los aspectos más críticos de la crisis. El conflicto ha interrumpido la producción agrícola, el transporte de alimentos y el funcionamiento de los mercados locales. En muchas regiones, el hambre no es consecuencia de una catástrofe natural, sino del bloqueo deliberado de rutas y del colapso de la economía. Niños, mujeres embarazadas y personas mayores se encuentran entre los más afectados, enfrentando niveles alarmantes de desnutrición.

El acceso a la ayuda humanitaria representa otro desafío central. Las organizaciones humanitarias, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), enfrentan enormes dificultades para operar dentro del país. Los ataques a trabajadores humanitarios, el saqueo de suministros y las restricciones impuestas por los actores armados han limitado gravemente la entrega de asistencia. En numerosas ocasiones, comunidades enteras han quedado aisladas durante meses, sin ningún tipo de apoyo externo, lo que ha profundizado el sufrimiento humano.

El desplazamiento forzado también ha incrementado de manera significativa los riesgos de violencia y abusos contra los derechos humanos. Mujeres y niñas desplazadas enfrentan altos niveles de violencia sexual, explotación y trata de personas, tanto durante el desplazamiento como en los campamentos. La falta de seguridad y de mecanismos de protección adecuados ha generado un entorno de extrema vulnerabilidad, mientras que la ausencia de sistemas judiciales funcionales ha contribuido a la impunidad. Los niños y niñas, por su parte,

enfrentan el reclutamiento forzado por grupos armados, el trabajo infantil y la interrupción prolongada de su educación.

La crisis no se limita al territorio sudanés. Países vecinos como Chad, Sudán del Sur, Etiopía y Egipto han recibido grandes flujos de personas refugiadas sudanesas. Muchas llegan tras recorridos largos y peligrosos, en condiciones de salud críticas y con necesidades urgentes de protección. Estos Estados, que ya enfrentan desafíos económicos y sociales propios, carecen de los recursos necesarios para responder adecuadamente, lo que ha generado hacinamiento en los campamentos y una creciente presión sobre los servicios públicos.

A todo esto se suma la insuficiencia de financiamiento internacional. A pesar de los reiterados llamados de emergencia por parte de ACNUR y otras agencias de las Naciones Unidas, la respuesta global ha sido limitada frente a la magnitud de la crisis. Esta falta de recursos ha obligado a priorizar respuestas de corto plazo, dejando sin atender soluciones más sostenibles como el reasentamiento, la integración local o el retorno seguro y voluntario cuando las condiciones lo permitan.

En este contexto, la crisis de refugiados en Sudán debe entenderse no solo como una emergencia humanitaria, sino como el reflejo de una crisis política profunda y prolongada. La militarización del poder, la ausencia de gobernanza efectiva y la impunidad histórica han creado un entorno en el que la población civil continúa pagando el precio más alto. La respuesta internacional, y en particular el papel de ACNUR, resulta fundamental para garantizar la protección de las personas desplazadas, asegurar el acceso a ayuda humanitaria y promover soluciones duraderas que devuelvan dignidad y esperanza a millones de sudaneses afectados por el conflicto.

Problemática actual

El desplazamiento forzado en Sudán ha alcanzado niveles críticos. Millones de personas se encuentran desplazadas dentro del país, viviendo en condiciones extremadamente precarias. Muchas familias han buscado refugio en asentamientos improvisados, edificios abandonados o comunidades ya empobrecidas, donde el acceso a alimentos, agua potable y servicios de salud es limitado o inexistente. La huida constante y el miedo a nuevos ataques han generado una situación de inestabilidad permanente para quienes han perdido sus hogares.

La inseguridad alimentaria es una de las consecuencias más graves del conflicto. La violencia ha interrumpido la producción agrícola, el transporte de alimentos y el funcionamiento de los mercados locales. Como resultado, amplios sectores de la población enfrentan hambre severa y desnutrición, especialmente niños y niñas, mujeres embarazadas y personas mayores. En muchas regiones, la falta de alimentos no es producto de la escasez natural, sino del bloqueo deliberado de rutas y del uso del hambre como herramienta de guerra.

El acceso a la ayuda humanitaria continúa siendo uno de los principales retos. Las organizaciones humanitarias enfrentan constantes obstáculos para operar, incluyendo ataques directos, saqueo de suministros, restricciones impuestas por los actores armados y la ausencia de garantías de seguridad. En numerosas ocasiones, los convoyes humanitarios no logran llegar a las comunidades más afectadas, dejando a miles de personas completamente aisladas. Esta situación no solo agrava el sufrimiento humano, sino que también limita la capacidad de ACNUR y otras agencias para cumplir con su mandato de protección.

Las personas desplazadas, particularmente mujeres y niñas, enfrentan riesgos adicionales. La violencia de género ha aumentado significativamente, tanto durante el desplazamiento como en los campamentos de refugiados y

desplazados internos. La falta de seguridad, iluminación y mecanismos de protección adecuados ha facilitado abusos sexuales, explotación y trata de personas. Al mismo tiempo, la ausencia de sistemas judiciales funcionales ha generado un clima de impunidad que profundiza la vulnerabilidad de estas poblaciones.

El impacto de la crisis se extiende más allá de las fronteras de Sudán. Países vecinos como Chad, Sudán del Sur, Etiopía y Egipto han recibido grandes flujos de personas refugiadas sudanesas. Muchas de ellas llegan en condiciones críticas, tras haber recorrido largas distancias sin acceso a alimentos ni atención médica. Estos Estados, que ya enfrentan desafíos económicos y sociales propios, carecen de los recursos necesarios para responder adecuadamente a la magnitud de la crisis, lo que ha provocado el hacinamiento de campamentos y el deterioro de las condiciones de vida.

A esta situación se suma la falta de financiamiento internacional suficiente. A pesar de los reiterados llamados de emergencia, la respuesta de la comunidad internacional no ha sido proporcional a la gravedad de la crisis. Esta escasez de recursos ha obligado a reducir programas esenciales de asistencia, dejando a millones de personas sin apoyo adecuado. Sin una acción internacional coordinada y sostenida, la crisis humanitaria en Sudán corre el riesgo de prolongarse y profundizarse aún más.

Preguntas guía

- ¿Cómo ha afectado el conflicto armado en Sudán a la vida cotidiana de la población civil?

- ¿Cuáles son los principales factores que han impulsado el desplazamiento masivo de personas dentro y fuera del país?
- ¿Qué obstáculos enfrentan las organizaciones humanitarias para garantizar el acceso a la ayuda?
- ¿De qué manera el conflicto ha incrementado los riesgos para mujeres, niñas y otros grupos vulnerables?
- ¿Cómo impacta la crisis de refugiados sudaneses a los países vecinos y a sus sistemas de acogida?
- ¿Qué responsabilidades tiene la comunidad internacional frente al colapso humanitario en Sudán?
- ¿Cuál debe ser el papel de ACNUR en la protección y asistencia de las personas desplazadas?
- ¿Qué estrategias pueden implementarse para garantizar corredores humanitarios seguros?
- ¿Qué soluciones duraderas pueden ofrecerse a las personas refugiadas y desplazadas?
- ¿Cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo si la crisis no es atendida de manera efectiva?

Referencias

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (2025). Sudan GR2024 situation summary.

<https://www.unhcr.org/sites/default/files/2025-06/Sudan%20GR2024%20Situation%20Summary%20FINAL%20v3.pdf>

Naciones Unidas Oficina en Ginebra. (2025, 16 de febrero). Sudán, la crisis humanitaria y de desplazados más devastadora del mundo.

<https://www.ungeneva.org/es/news-media/news/2025/02/103392/sudan-la-crisis-humanitaria-y-de-desplazados-mas-devastadora-del>

Human Rights Watch. (2024). Sudan. En World Report 2024.

<https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/sudan>

World Food Programme. (s. f.). Sudan.

<https://www.wfp.org/countries/sudan>